**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA**

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo
Pereira, octubre veintidósde dos mil veintiuno
Expediente: 66001310300520160016202
Proceso: Acción popular
Asunto: Sentencia
Demandante: Javier Elías Arias Idárraga
Coadyuvente: Cotty Morales Caamaño
Demandado: Notaría Sexta del Círculo de Pereira
Acta No. 512 del 22 de octubre de 2021
Sentencia No. TSP.SP-0014-2021

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por ambas partes y la coadyuvante contra la sentencia del 23 de julio de 2021, dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito local, en esta acción popular propuesta por **Javier Elías Arias Idárraga**, coadyuvado por **Cotty Morales Caamaño**, frente a la **Notaría Sexta del Círculo de Pereira**, en cabeza de **William González Betancurth**.

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

Expone el demandante¹ que en la oficina de la entidad accionada, que es un inmueble abierto al público, no se prestan los servicios de profesional intérprete y guía intérprete de planta, *"...ni posee señales visuales, sonoras ni auditivas como lo ordena art. 5, 8 y 15 Ley*

¹ 01PrimerInstancia, 01PrimerInstancia, C01Principal, 002DemandaActaReparto

982 de 2005", ni mucho menos se cuenta con señales visuales, sonoras ni auditivas.

1.2. Pretensiones

Busca, en consecuencia, que se ordene a la demandada que garantice en el inmueble la presencia de un guía intérprete y un intérprete o con una entidad idónea, certificados todos por el Ministerio de Educación Nacional, para que de planta se atienda a la población objeto de protección del artículo 8 de la ley 982 de 2005; que se condene en costas y se ordene la constitución de una póliza a la accionada con el fin de garantizar el cumplimiento de la orden dada en la sentencia.

1.3. Respuesta de la entidad accionada

La entidad encartada contestó la demanda y excepcionó i) falta de legitimación por pasiva; ii) Inexistencia de la vulneración o amenaza del derecho o interés colectivo; (iii) "La improcedencia de la acción popular"; y, (iv) una insuficiencia probatoria, pues la carga está en cabeza del accionante. Se fundamentan, básicamente, en que la demandada no existe como persona jurídica ni es sujeto de derechos, que el legitimado es el notario, como persona natural, y no existe prueba alguna de la amenaza al derecho colectivo invocado².

Se opuso a lo pretendido.

1.4. Sentencia de primera instancia

Se accedió a las pretensiones, por cuanto "*Tales argumentos defensivos que convergen en uno mismo, no están llamados a prosperar habida cuenta que lo ordenado en el artículo 8 de*

² 01PrimeralInstancia, 01PrimeralInstancia, C01Principal, 018EscritoContestacionAccion

la Ley 982 de 2005, contrario a lo considerado por la Notaría demandada, aplica igualmente para particulares que presten servicios públicos. En efecto, de la lectura de la citada norma, que ya ha sido transcrita, surge evidente que el mandato para que se incorporen dentro de los programas de atención al cliente el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas, es obligación impuesta no solo a las entidades estatales sino "a las empresas prestadoras de servicios públicos" "y en general las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al público" y la actividad notarial es un servicio público, como lo ha ensañado en su jurisprudencia la Corte Constitucional, Sentencia C-863 de 2012³.

1.5. Apelación

Apeló, por un lado, la parte actora⁴, que simplemente presenta recurso y realiza una serie de peticiones, que fueron resueltas por el juzgado mediante auto del 9 de agosto de 2021⁵.

Por el otro, la accionada insiste en el hecho de que no está vulnerando ningún derecho colectivo y, con fundamento en el interrogatorio que rindió el Notario Sexto, señala que los empleados están capacitados para atender a la población que llegue a la Notaría, sea ciega, sordo ciega o hipoacúsica, sin perder de vista que el mismo notario, en caso de tratarse de una persona ciega, debe por ley leer de viva voz el documento. Concluye que *"...no puede el juez bajo el tamiz de una protección a un interés colectivo, exceder el marco normativo para imponer una obligación que no fue contemplada en la ley; aun así la notaría tal y como quedó señalado en la diligencia de interrogatorio ha cumplido a cabalidad con su obligación."*⁶

³ ibídem, 002DemandaActaReparto

⁴ Ibídem, 061EscritoRecursoAccionante y 062

⁵ 070AutoRechazaReposicionConcedeApelacion

⁶ ib. 064EscritoRecursoAccionado

Finalmente, de la coadyuvante, del extenso y farragoso escrito que presenta, se deduce que su alzada se orienta principalmente a la fijación de costas, con las cuales está en desacuerdo, tanto así que finaliza señalando que *"Para verificar el acompañamiento técnico jurídico de esta acción, se solicita que se tengan en cuenta las actuaciones dentro del proceso o se reciban los testimonios de los vecinos de la comunidad y de la accionante para que informen la manera en que fueron asesorados y atendidos para los efectos de esta acción."*⁷

2. CONSIDERACIONES

1. Concurren los presupuestos procesales y no se advierte causal de nulidad que afecte lo actuado.

2. El interviniente está legitimado, ya que la acción popular puede ejercerla cualquier persona natural o jurídica, por sí misma, o por otro que actúe a su nombre, como se establece en los artículos 12 y 13 de la Ley 472, y lo han precisado las altas Cortes, como puede consultarse en sentencias de constitucionalidad como las C-215 de 1999, C-377 de 2002, C-230 de 2011; o en sede de tutela por la Corte Suprema, ejemplo de lo cual es la sentencia STC14393 -2015; o en la vía contencioso administrativa, según se aprecia en sentencias del 31-10-2002 y 13-02-2006, C.P. Ricardo Hoyos D., expediente 2000-1059-01 (AP 518) y Germán Rodríguez V., expediente 2003-00861-01 (AP). Esto por activa.

Y por pasiva igual, por cuanto, en los términos del artículo 9 de la Ley 472 de 1998, la acción popular procede contra toda acción u omisión de las autoridades pública o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Y en este

⁷ ib. o66EscritoRecursoCoadyuvante

caso, al notario accionado, William González Betancurth, se le imputa la amenaza, ya que la notaría, por sí misma, carece de personería jurídica, así que es él, quien responde como persona natural⁸, fuera de que, con fundamento en el artículo 131 de la Constitución Política, prestan un servicio público "*...en razón a que constituye una labor destinada a satisfacer, de manera continua y obligatoria, una necesidad de interés general, como es la función fedante, sometida a un régimen jurídico especial, bien sea que se preste por el Estado o por los particulares.*"⁹. Esto, con independencia de lo que al final se pueda resolver sobre su obligación de tener intérprete y guía intérprete en sus instalaciones.

3. El problema jurídico consiste en definir, por un lado, si se confirma la sentencia de primer grado que accedió las pretensiones de la demanda, porque se encontró demostrado que la notaría accionada carece en sus instalaciones de intérprete y guía intérprete para atender a las personas ciegas, sordo ciegas e hipoacúsicas; o si, como sugiere el apoderado de la parte accionada, la entidad encartada tiene capacitado al personal para la atención de esta clase de población, tal como se indicó por el notario titular en el interrogatorio de parte.

Además, se deben analizar los argumentos expuestos por la parte actora y el coadyuvante, que también impugnan, al menos los que deben ser resueltos en esta sede, porque lo atinente a la cesión de las costas que pide el demandante, es cuestión que debe debatirse ante el juez de primer grado.

En este sentido, se recuerda que los impugnantes centraron sus quejas en que se debe i) ordenar la póliza para garantizar el cumplimiento de la sentencia; ii) reconocer el incentivo previsto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998; y iii) conceder costas a la coadyuvante.

⁸ Corte Constitucional. Sentencia C-863-12. MP Luis Ernesto Vargas Silva.

⁹ Sentencia citada.

4. Respecto de la impugnación de la accionada, bastante se ha dicho que la acción popular fue introducida a nuestra Constitución Política en el artículo 88 y posteriormente desarrollada por la Ley 472. Su objeto, según el artículo 1°, es el amparo de los derechos colectivos, que se caracterizan, porque su titularidad la tiene la comunidad en general, en cuanto son indivisibles (Sentencia C-569-04). Tal normativa prescribe, en el artículo 2°, que se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Además, se puede interponer contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos, según el artículo 9° de la Ley).

Por tanto, son supuestos de la misma (i) Una acción u omisión de la autoridad o el particular; (ii) La existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; y, (iii) La relación causal entre la acción u omisión y la vulneración o amenaza de tales derechos e intereses, que deben ser acreditados, como establece el artículo 30 de la Ley, por el demandante, salvo que exista imposibilidad para ello.

Ha explicado esta Corporación, desde hace tiempo (radicado 2016-00595-02, sentencia del 18 de mayo de 2018), y lo reiteró en la sentencia del 17 de junio de 2020, radicado 2019-00326-01, ambas con ponencia del Magistrado Duberney Grisales Herrera, en tesis que ha sido acogida por esta Sala¹⁰, que la Corte Constitucional en la sentencia C-215 de 1999, aclaró que la acción popular reviste carácter público *"(...) en cuanto "... se justifica que se dote a Los particulares de una acción pública que sirva de instrumento para poner en movimiento al Estado*

¹⁰ Sentencia del 28 de mayo del 2018, A.P. 2016-00586-01 y las que le fueron acumuladas; sentencia del 1º de agosto del 2018, A.P. 2016-00309-02; sentencia del 24 de agosto de 2020, A.P. 2018-00032-01, a la que fueron acumuladas otras catorce.

en su misión, bien de dirimir los conflictos que pudieren presentarse, bien de evitar Los perjuicios que el patrimonio común pueda sufrir"; también restitutorio, puesto que propende por *"(...) el restablecimiento del uso y goce de tales derechos e intereses colectivos"*; esto, además de su naturaleza preventiva. *"(...) que significa que no es ni puede ser requisito para su ejercicio, el que exista un daño o perjuicio de los derechos o intereses que se busca amparar, sino que basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca, en razón de los fines públicos que las inspiran"*. Carácter preventivo que reiteró en la sentencia T-176 del 2016.

5. Como se señaló, la demanda alude a la prestación de un servicio público carente de condiciones de accesibilidad para ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos, conforme con lo reglado por los artículos 5 y 8 de la Ley 982 de 2005 y los literales d), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, derecho en el que se centró la decisión que, según se dijo, se toma como referente para la resolución del presente asunto, por su similitud en torno al cuestionamiento que se hace en el libelo. Como ello es así, se recuerda lo dicho en esa oportunidad:

“Explica la Corte Constitucional que el derecho al acceso a los servicios públicos impone la observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, además que es obligación del Estado regular, controlar y vigilar su prestación (artículo 365, CP), sin que ello signifique que solo deba hacerlo de manera directa, pues también se puede brindar por intermedio de comunidades organizadas o de particulares, también el Consejo de Estado en sentencia del 17 de abril de 2007, Consejero Ponente Ariel Hernández expediente 2003-00266-01, ha referido que el derecho de acceso a los servicios públicos comporta dos aspectos esenciales, el primero, referente a la capacidad que cualquier persona de la sociedad tiene de hacerse usuario o beneficiario; y, el segundo, la exigencia que recae sobre el prestador de que se haga con eficiencia y oportunidad. En efecto refirió:

...Por eficiencia, que como se anotó es un imperativo constitucional de los servicios públicos, debe entenderse la prestación de estos utilizando y disponiendo del mejor modo posible los instrumentos o

recursos necesarios para cumplir los fines propuestos; por oportunidad, en cambio, se debe entender la respuesta dentro de un plazo razonable que debe tener un usuario cuando requiera estos servicios, así como la permanencia de la prestación de los mismos. La vulneración de este derecho colectivo entonces se manifiesta cuando se lesione el interés subjetivo de la comunidad a que le presten servicios públicos de manera eficiente y oportuna...

En ese orden de ideas el acceso al servicio público demanda la inexistencia de “barreras” que impidan acceder a los usuarios del sistema a los servicios ofrecidos, los cuales deben proveerse de manera eficiente y oportuna, así, en tratándose de personas en situación de discapacidad, que presentan dificultades de comunicación, deben emplearse los mecanismos creados por la ley para sortear aquel obstáculo, de tal suerte que puedan acceder al servicio directamente y por sus propios medios.

La Ley 361 de 1997 señala, los criterios básicos para facilitar la accesibilidad a cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de las personas con movilidad reducida, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en cualquier ambiente; si bien regula el tema de la accesibilidad desde el punto físico, es pertinente traer a colación la referencia que hace en tomo a la obligación de los particulares que prestan servicios públicos, a saber “Artículo 46. La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios”

Ahora, el Estado en cumplimiento de la obligación asumida en el artículo 90 de la "Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, estableció como medida pertinente para asegurar el acceso a los servicios públicos de las personas con discapacidad a fin de que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, que:

...Corresponde a las entidades (...) privadas encargadas de la prestación de los servicios públicos (...). desarrollar sus funciones, competencias, objetos sociales, y en general todas las actividades, siguiendo los postulados del diseño universal, de manera que no se excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna persona en razón de su discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir con los fines del artículo 9° de la Ley 1346 de 2009”.
Sublínea extratextual. Artículo 14-10 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013.

Finalmente, el legislador mediante la Ley 982, por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas, estatuyó en su artículo 8° que:

... Las entidades estatales de cualquier orden, incorporan paulatinamente dentro de los programas de atención al cliente, el servicio de intérprete y guía intérprete para las personas sordas y sordociegas que lo requieran de manera directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan tal servicio.

De igual manera, lo harán las empresas prestadoras de servicios públicos, las Instituciones Prestadoras de Salud, las bibliotecas públicas, los centros de documentación e información y en general las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrezcan servicios al público, fijando en lugar visible la información correspondiente, con plena identificación del lugar o lugares en los que podrán ser atendidas las personas sordas y sordociegas...

Claramente se trasladó a las entidades públicas y privadas, la obligación de garantizar el acceso de las personas en situación de discapacidad al servicio público que ofrezcan a la comunidad. Que sea el Estado garante de la prestación de ese servicio, en manera alguna le impone asumir todas las cargas inherentes a la adecuación de instalaciones y herramientas tecnológicas, y contratación de personal idóneo, pues es el oferente quien debe hacerlo, en este caso, la entidad accionada”

Por otro lado, la Ley 472, que regula las acciones populares, señala, en su artículo 4°, algunos de los derechos colectivos susceptibles de protección, entre ellos, *“d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público”, l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y “m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”*

6. Ahora bien, a partir de la sentencia de esta Colegiatura, del 11 de septiembre de 2019, radicado 66682-31-03-001-2018-0494-01, con ponencia del Magistrado Grisales Herrera, se morigeró la posición que se traía en el sentido de que era imprescindible que se contratara de planta un intérprete y guía intérprete en estas entidades,

para convenir desde allí que también resulta viable valerse de empresas que de manera profesional brinden ese servicio, e incluso acudir a plataformas virtuales para cumplir el cometido, siempre que se asegure una adecuada prestación del mismo.

Se dijo allí que

la disposición legislativa contenida en el artículo 8º, Ley 982, se constituye en la acción afirmativa impuesta por el Estado a las entidades públicas y a los particulares que presente servicios públicos, consistente en incorporar en sus programas de atención al cliente el servicio de intérprete y guía de intérprete para personas sordas y sordo-ciegas. Aquella es una carga que los prestadores de un servicio público deben asumir, independientemente de que se trate de una entidad estatal o de un particular, por manera que es obligación del banco garantizar el acceso a la información y la intercomunicación de los usuarios con discapacidad auditiva y/o visual, por intermedio del mentado profesional, y es de su cargo la erogación económica que de ello se desprenda.

Y se admitieron los ajustes contenidos en un programa de servicio al cliente consistentes en la orientación a los empleados hacia el (i) trato especial que requiere este grupo poblacional; (ii) el manejo de expresiones incluyentes; y, (iii) las técnicas de atención previas a la intercomunicación virtual con el profesional intérprete; (iii) el uso de una alarma preferencial; (iv) la fijación de avisos en castellano y el sistema braille; y (v) la comunicación mediante el sistema de video-llamada con un profesional en el área.

Adicionalmente, en lo que a la población sordo-ciega se refiere, atendió como razonable el contrato celebrado con una sociedad, relativo al suministro de intérpretes y guías intérpretes para sordo-ciegos, cuando algún usuario así lo requiera, consistente en la fijación de citas y remisión del profesional a la sucursal, con un tiempo de respuesta no mayor a tres (3) días; y, también la publicación, tanto en la oficina como en el portal web, de información sobre este servicio. Y que los profesionales que se enviarían tendrían la experiencia y capacitación necesarias para actuar como guías intérpretes e intérpretes, instrumentos que halló idóneos y suficientes para garantizar el acceso al servicio público prestado.

Lo que ocurre es que en el caso tratado en esa oportunidad, la entidad accionada demostró, con documentos y en la inspección judicial que se realizó, que contaba con todos los ajustes razonables para la protección de la población sorda, ciega y sordo ciega, lo que no ocurrió en este evento, en el que bastó un simple derrotero en la contestación de la demanda sobre aspectos procesales, sustanciales y probatorios de la demanda constitucional, que en nada contribuye a despejar si, en realidad, la notaría posee los servicios demandados para atender la población ciega, sordo ciega e hipoacúsica.

Y a pesar de que en el interrogatorio¹¹ el notario titular indicó que algunos empleados tienen capacitación en la atención de esta clase de personas, nada de ello se acreditó; es más, expresamente indicó que no tienen contratado dentro de la notaría con personal intérprete ni guía intérprete de planta, pero señaló que poseen " *...el convenio con el Instituto de Audiología proyecto de inclusión donde en el momento en el que se le requiera, en el momento en el que se le necesite, que sea absolutamente necesario nosotros lo podemos llamar, y el compromiso de ellos es que en 15 minutos en media hora está esa persona aquí en las instalaciones de la Notaría, pues tenerlo de planta doctora, además de costoso puede ser innecesario...*", manifestación que se quedó en una simple afirmación sin sustento probatorio, insuficiente para llevarle certeza al juez de que lo dicho es totalmente cierto.

7. Lo anterior, obliga a decir que las defensas planteadas, esto es, la inexistencia de la vulneración o amenaza del derecho o interés colectivo; la improcedencia de la acción popular; y, la insuficiencia probatoria, están llamadas a fracasar, por cuanto, como se analizó, por la naturaleza misma de la acción popular y su carácter preventivo apenas es menester que exista la amenaza o el riesgo de que se produzca la afectación, para que la protección se abra paso.

Por estos aspectos, entonces, se prohijará el fallo protestado.

¹¹ 01PrimeralInstancia, 01PrimeralInstancia, Co1Principal, 041DiligencialInterrogatorioParte.

8. Finalmente, en lo que tiene que ver con los argumentos de la alzada presentados por la parte demandante y su coadyuvante, es preciso indicar lo siguiente:

i) Respecto de la póliza de cumplimiento, la Sala no comparte lo expuesto por la juez de primer grado, puesto que el artículo 42 de la Ley 472 de 1998 es claro en señalar que "*La parte vencida en el juicio deberá otorgar una garantía bancaria o póliza de seguros, por el monto que el juez determine, la que se hará efectiva en caso de incumplimiento a lo dispuesto por la sentencia*", sin que sea requisito que se hayan o no solicitado medidas cautelares, como se argumenta en el fallo que se revisa.

Así que no se trata de una potestad del juez o de la parte sino de una imposición legal, como ha sido considerado en varias ocasiones por el Consejo de Estado¹², aunque, bueno es decirlo, al confirmar esa tesis, también señaló esa alta Corporación que si se trata de una entidad pública, no es imperativa tal orden¹³, decisiones que sirven como criterio auxiliar.

Y lo que esta Sala ha venido sosteniendo en casos similares a este que el monto adecuado para fijar la póliza es de \$5.000.000,00, así que en este sentido se revocará el ordinal "SEXTO" del fallo de primer grado y, en su lugar, se accederá a la garantía pedida.

ii) En cuanto al incentivo que pide, baste decir. que inicialmente la Corte Constitucional mediante sentencia C-459 de 2004, consideró dicho estímulo ilegítimo, pero, posteriormente, la Ley 1425 de 2010 derogó expresamente los artículos 39 y 40 de la Ley 472 y, tácitamente, las demás normas del ordenamiento que fueran incompatibles, por razones de conveniencia y de interés general, norma

¹² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de noviembre de 2001. Radicado sentencia 54001-23-31-000-2000-1750-01(AP-131). CP Ligia López Díaz; y Sección Primera, sentencia del 15 de febrero de 2007, radicado 15001-23-31-000-2001-00085-01(AP). CP Camilo Arciniegas Andrade.

¹³ Sección Primera, sentencia del 1º de diciembre de dos mil cinco, radicado 54001-23-31-000-2002-01055-01(AP). CP Camilo Arciniegas Andrade.

que fue hallada conforme a la Constitución en la sentencia C-630 de 2011. Así que no hay lugar a reconocimiento de incentivo alguno, pues, simple y llanamente, no existe en el ordenamiento jurídico.

iii) Y Las costas a favor del coadyuvante no tiene asidero en la primera instancia, en la medida en que quien acude en esa condición, lo hace con el fin de contribuir con la gestión que realiza el demandante inicial que es a favor de quien está previsto ese beneficio en la Ley 472 de 1998, en armonía con el artículo 365 del CGP. Ahora, cuando esta Corporación ha impuesto costas en segunda instancia incluyendo al coadyuvante, es porque este ha apelado el fallo y sale airoso, pero, en todo caso, se ordena un solo pago a favor suyo y del accionante principal, si es que también impugnó.

De manera que esta réplica no sale avante.

9. Todo lo expuesto supone confirmar parcialmente la sentencia impugnada, pues acertó la funcionaria de primer grado, dado que la prueba allegada es insuficiente para dar por sentado que, a la población ciega, sorda y sordociega, se le brindan condiciones mínimas de accesibilidad a los servicios públicos que presta la Notaría. No pasa lo mismo con el ordinal "SEXTO" del fallo el cual se revocará y se ordenará la garantía de la póliza la cual por disposición legal se debe prestar.

10. En atención a que la sentencia no se confirma, ni revoca en su totalidad, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 3 y 4 del artículo 365 del CGP, se abstendrá la Sala de imponer costas en esta sede.

3. DECISIÓN

En armonía con lo dicho, la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. Se **CONFIRMA PARCIALMENTE** la sentencia proferida el 23 de julio de 2021, dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito local, en esta acción popular propuesta por **Javier Elías Arias Idárraga**, coadyuvante: **Cotty Morales Caamaño**, frente a la **Notaría Sexta del Círculo de Pereira – Notario: William González Betancurth**.

2. Se **REVOCA** el numeral "SEXTO" del fallo revisado, y, en su lugar, se ordena al Doctor William González Betancurth, Notario Sexto del Círculo de Pereira, que, de conformidad con lo previsto por el artículo 42 de la Ley 472 de 1998, en el término de diez (10) días, preste garantía bancaria o póliza de seguros, por la suma de \$5.000.000,00 para garantizar el cumplimiento de esta sentencia.

3. Sin costas en esta instancia.

4. Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Notifíquese,

Los Magistrados,

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS

DUBERNEY GRISALES HERRERA

Firmado Por:

Jaime Alberto Zaraza Naranjo

Magistrado

Sala 004 Civil Familia

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Duberney Grisales Herrera

Magistrado

Sala 001 Civil Familia

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Carlos Mauricio Garcia Barajas

Magistrado

Sala 002 Civil Familia

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

49e8c018ab800d61163eff4a4d5497cd8daa2707a7e47fb535119a92af817a60

Documento generado en 22/10/2021 03:32:52 PM

**Valide este documento electr3nico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**